

El poder bajo revisión: soberanía, candidaturas y salud pública marcan la nueva tensión nacional

México atraviesa una jornada donde la política dejó de moverse en superficie. El Gobierno elevó el tono frente a Estados Unidos por el caso de El Mayo Zambada; Morena prepara filtros para evitar candidaturas de riesgo rumbo a 2027; los nuevos partidos enfrentarán su primera prueba sin coaliciones; y el IMSS combina avances médicos con alertas administrativas. La gobernabilidad entra en fase de auditoría pública: todos serán medidos por resultados, no por discurso.

La agenda nacional volvió a concentrarse en una pregunta incómoda: ¿mintió Estados Unidos sobre la captura y traslado de El Mayo Zambada?

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “todo parece indicar” que el exembajador Ken Salazar no dijo la verdad cuando aseguró que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo que llevó al capo desde México hasta territorio norteamericano.

El caso escaló porque el FBI exhibió la aeronave presuntamente utilizada en el traslado como parte de una operación propia. Para el Gobierno mexicano, esa imagen cambió la conversación: ya no se trata sólo de la detención de un narcotraficante, sino de una posible intervención extranjera sin información clara al Estado mexicano.

La postura oficial busca marcar una frontera política: México coopera con Estados Unidos en seguridad, pero no acepta subordinación. La frase suena fuerte y conecta con una sensibilidad nacional histórica. Pero ahora el reto será probarlo.

El Gobierno mexicano pidió información formal a la Fiscalía General de la República y al FBI. También se abrió la posibilidad de revisar si hubo violaciones a tratados internacionales, a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.

El punto fino es que el tema no se puede manejar sólo como mensaje político. Requiere expediente, cronología, documentos y responsabilidad institucional. En asuntos de soberanía, la narrativa sirve para abrir la conversación; las pruebas sirven para ganarla.

El caso también golpea el tablero interno. Sinaloa permanece bajo presión pública por la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales. Además, el nombre de Rubén Rocha Moya sigue apareciendo en el debate político, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores reservó por cinco años información relacionada con investigaciones sobre presuntos vínculos de actores políticos con el Cártel de Sinaloa.

Esa reserva puede tener justificación diplomática, pero políticamente genera ruido. En tiempos de sospecha pública, la opacidad siempre cobra intereses.

Mientras el Gobierno enfrenta tensión bilateral, Morena se prepara para su batalla interna rumbo a 2027.

La dirigencia nacional revisará a fondo los perfiles que buscan competir por gubernaturas en 17 estados. El filtro no será un simple trámite. Tendrá que revisar antecedentes, trayectorias, posibles conflictos de interés y riesgos reputacionales.

Morena sabe que su principal amenaza no es la falta de aspirantes. Es exactamente lo contrario: tiene demasiados. Y cuando sobran aspiraciones, sobran inconformes.

La selección de candidaturas será una operación de alto riesgo. Un mal perfil puede contaminar una elección completa; una imposición puede fracturar estructuras locales; y una candidatura con señalamientos puede convertirse en regalo para la oposición.

En paralelo, los nuevos partidos nacionales tendrán su primera prueba real. Somos México y Construyendo Sociedades de Paz deberán competir sin coaliciones y alcanzar al menos 3% de la votación nacional para conservar registro.

Eso los obliga a demostrar estructura, mensaje y capacidad territorial. No basta con existir en el papel. Tendrán que caminar secciones, convencer votantes y sobrevivir al primer corte electoral. En política, el registro es la entrada al estadio; el partido se gana en la cancha.

La oposición tradicional tampoco tiene margen para relajarse. El PRI enfrenta señales de debilitamiento legislativo, el PAN busca reposicionarse en plazas locales y Movimiento Ciudadano intenta mantener competitividad en estados estratégicos. El sistema de partidos está cambiando, pero aún no queda claro quién capitalizará esa transición.

En el bloque sindical y laboral, la jornada no estuvo marcada por una gran movilización nacional, pero sí por señales institucionales relevantes.

El Senado aparece bajo cuestionamiento por baja actividad durante el receso. Apenas nueve de 68 comisiones ordinarias han sesionado, mientras las dietas se mantienen completas. El dato tiene impacto político porque refuerza una percepción ciudadana peligrosa: mucho costo público y bajo rendimiento legislativo.

También se mantiene en la agenda la violencia política de género. El caso de Gerardo Fernández Noroña, señalado por el Tribunal Electoral de Michoacán por violencia política

contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, exhibe una exigencia cada vez más fuerte: la vida pública no puede normalizar agresiones contra mujeres que ejercen cargos de representación.

En salud, el IMSS presentó una nota positiva de alto impacto social.

La nueva área de hemodiálisis del Anexo Extensión Hospitalaria Tlatelolco brinda 270 sesiones diarias a pacientes con insuficiencia renal y busca llegar a 360. La diferencia no es menor: para una persona que requiere hemodiálisis, cada sesión es una línea de vida.

El valor institucional está en que el servicio ahora depende directamente del IMSS y no de un esquema subrogado. Eso permite mayor control, más turnos y mejor capacidad para reducir rezagos.

Sin embargo, el Instituto también enfrenta un flanco administrativo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó y multó a una empresa por proporcionar información falsa en una licitación vinculada al suministro de víveres para unidades médicas del régimen ordinario e IMSS-Bienestar.

El mensaje es doble: el IMSS puede avanzar en capacidad médica, pero necesita blindar sus contrataciones. En salud pública, no hay espacio para proveedores improvisados ni procesos vulnerables.

La fotografía nacional es clara. México está defendiendo soberanía frente a Estados Unidos, Morena está depurando su tablero electoral, los partidos nuevos buscan sobrevivir y el IMSS intenta convertir inversión y control operativo en confianza ciudadana.

El reto de fondo es uno solo: demostrar capacidad institucional.

Porque la ciudadanía ya no evalúa únicamente anuncios. Evalúa si el Gobierno defiende al país con pruebas, si los partidos postulan perfiles confiables, si los legisladores trabajan y si el IMSS atiende mejor.

La política nacional entró en modo revisión. Y esta vez, el auditor principal será la gente.